

Edición Especial

18 de octubre en el Biobío 5 reflexiones después de 5 años

EN ESTA EDICIÓN

El estallido social, una mirada desde la historia

Por Armando Cartes Montory

Más sobre el 18 de octubre. Disociación y revolución o concordia y unanimidad

Por Rodrigo Colarte Olivares

El Biobío profundo y el octubre chileno

Por Miguel Ángel Fernández Plaza

A los pocos días, a cinco años, a veinte años

Por Miguel Nazar Daccarett

Análisis de la economía regional en el período

Por Viviana Véjar Himsalam

PATRICIO ÓRDENES
Editor

 @faro_udd

 @faro_udd

 faro udd

 faro@udd.cl

 www.faro.udd.cl

El estallido social, una mirada desde la historia



Armando Cartes Montory
Profesor Titular, Universidad
de Concepción.
Doctor en Historia, Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso.

Al escritor norteamericano Mark Twain se atribuye la frase de que “la historia no se repite, pero a menudo rima”. Su reconocido ingenio, no desprovisto de agudeza y sentido común, revela uno de los rasgos propios del pasado: la paradoja de que, si bien los eventos no pueden repetirse -cambian las personas y las circunstancias- la esencia de los acontecimientos puede reproducirse en forma cíclica. *Corsi e ricorsi*, decía el filósofo de la historia Giambattista Vico, queriendo significar que esta no avanza de forma lineal empujada por el progreso, sino en forma de ciclos que se repiten, con avances y retrocesos.

¿Qué significan estas referencias para el tema que nos convoca? Pues dos cosas: que hay constantes, o talvez contextos, que propician interrupciones disruptivas de la convivencia social; y que si bien el pasado no se repite, puede entregar claves que iluminen nuestra comprensión del presente.

¿Es ese el caso del llamado estallido social del año 2019? Salvo los eventos de 1973, en cuya persistente sombra vivimos, no existe la imagen de Chile como un país de violencia política o de radicales transformaciones sociales. Es la imagen que proyecta el siglo XX. Lo anterior nos conduce a olvidar que las grandes definiciones políticas que vivimos como país son producto de los debates y las luchas del pasado.

La independencia, el centralismo, la pretendida homogeneidad racial o social del país, la consolidación territorial, ciertas conquistas sociales y sus instituciones democráticas, por señalar algunos elementos que nos caracterizan, demandaron, en ocasiones, trastornos muy violentos. Una breve síntesis, solo referida al siglo XIX en que se formó el país, así lo demostrará: hubo que sufrir cinco guerras civiles: la misma independencia; 1830, 1851, 1859 y 1891; más cuatro guerras externas: la independencia otra vez; la Guerra contra la Confederación en 1836, la Guerra contra España en 1865; y la Guerra del Pacífico. La ocupación de la Araucanía, entre varias campañas, entre 1862 y 1883, la verdad, cuesta clasificarla. Ya se aprecia que el XIX fue un siglo violentísimo, comparado con el cual el siglo XX aparece como una época más tranquila, a pesar de varios eventos ominosos.

¿Cómo entender el Chile de hoy, a la luz de la historia? ¿En la actual centuria podremos cambiar en el consenso o será la violencia, como decía un viejo revolucionario, “la partera de la historia”?

Por una coincidencia extraña, que, por supuesto, no es coincidencia, cada cuarenta años experimentamos una crisis. El traje institucional nos queda chico y parece que necesitamos una constitución nueva. Otros grupos sociales emergen, por el desarrollo y la educación y pretenden acceso a los beneficios del progreso, los que incluyen, por cierto, también una cuota de poder político. Ocurrió en 1810 con los criollos, que querían autonomía, pues se sentían capaces y merecedores de ella; luego en 1850 con las provincias, que no querían ser excluidas del gobierno del país que se estaba estructurando. También en 1891, con la oligarquía, que se sentía llamada a conducir, como clase, el país, y renegaba del autoritarismo portaliano que representaba Balmaceda. Se repite hacia 1930; en un ciclo que comienza en 1920, con la asunción de Arturo Alessandri a la presidencia, en la elección más reñida de nuestra historia, que permitió el ascenso de las clases medias, formadas en la escuela pública y la administración del Estado al poder político, que luego dominarían durante el siglo XX.



Surgen las leyes sociales; el Estado empresario y, en general, la administración pública del Chile moderno. Alessandri supo encauzar fuerzas tremendas de cambio por una ruta pacífica. Algo que solo pudo apreciarse a la vuelta de muchos años. Ocurrió, en fin, otra crisis en 1970, en un país frustrado por su lento crecimiento; sobreideologizado y con expectativas irreales, que condujeron al caos social y económico; y luego a la dictadura.

¿Qué puede decirse sobre el momento actual? Si aplicamos esta aproximación a las crisis de los cuarenta años, deberíamos estar viviendo otro. Comenzó en 2006 con la “revolución pingüina”, una generación que llevó su protesta a la Universidad en 2011, año de muchas marchas y pocas clases. Vivimos una época caracterizada por una nueva generación; hija de un país que ha crecido rápido, pero no tan rápido como las expectativas; que es uno de los dramas de la democracia. Una generación beneficiada por la expansión enorme de la educación superior, pero también endeudada con ella, que reclama, como los jóvenes de la emergente clase media de 1920, más poder político e inclusión. Una revolución de las expectativas que no sabemos si el país podrá satisfacer.

Una generación que llegó al poder, unos años después, con Michelle Bachelet, ampliando su crítica profunda a los bemoles de la modernización en diversos planos de la vida social. Coincidió con un ciclo de bajo crecimiento económico, que frustró las posibilidades de progreso de esa generación y los anhelos de las grandes mayorías a un bienestar creciente, al cual nos habíamos acostumbrado en las dos décadas precedentes. Eventos de corrupción pública y privada, sumado a la incapacidad institucional de procesar esperadas mejoras en salud, pensiones y otros servicios completaron el cuadro. Un profundo malestar recorrió la sociedad, que pudo no ser apto para encender la llama, pero sí para que la pradera ardiera cuando alguno –más o menos concertado– acercó la tea inflamada.

Como en el llamado “terremoto social” asociado al gran sismo de 2010, el estallido reveló cuán delgada es la capa de civilidad de nuestra sociedad. Partidos tradicionalmente democráticos se negaron a condenar la violencia, cayeron estatuas y se produjeron múltiples saqueos. Un movimiento que parecía no detenerse.

Quedará siempre la duda de qué habría ocurrido en marzo de 2020, de no haberse producido la pandemia del Covid que obligó al encierro e inhibió la circulación de personas. Un estallido algo extraño, pues no tenía líderes aparentes, ni caudillos ni colectivos, que varios intentaron apropiarse y que se recondujo, temporalmente, hacia la discusión de un cambio constitucional.

Le siguieron dos procesos constituyentes fracasados, de alto costo para el país, de los cuales rescato, sin embargo, dos cosas: la apertura de un cauce institucional, de una salida posible que dejó en suspenso, en parte al menos, las soluciones de fuerza, derivando las energías hacia el debate público. Permitieron también ganar un tiempo importante, en el cual la ciudadanía fue retomando su centro y rechazando los excesos discursivos.

No parece ser la actual una coyuntura fácil. El Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024, del PNUD, hace referencia a los fracasos reiterados de las iniciativas de cambio constitucional, de reformar el sistema de pensiones, o de resolver los problemas en el ámbito de la salud, como señales de una dificultad del país para cambiar y resolver los problemas que afectan a la sociedad. ¿A qué se debería esta incapacidad para procesar el cambio? El informe lo atribuye a dos factores: el predominio de relaciones disfuncionales entre los actores de la conducción, es decir, entre la ciudadanía, las elites y los movimientos sociales; y, en segundo término, a la preeminencia de lógicas inhibitorias de la conducción a nivel de las instituciones, los discursos públicos y las subjetividades. Se trata de lógicas globales, por cierto, pero que a Chile tocan especialmente.

¿Qué nos depara, pues, el futuro? Puede ser que el actual gobierno, ya casi de salida, pueda reconducir al país al estadio siguiente de su desarrollo social, a una democracia más madura o inclusiva. O bien, por el contrario, que sigamos en la lógica de la poca capacidad de diálogo y muchas acusaciones, que impidan los acuerdos necesarios.

Lo que sí es obvio para mí, es que vivimos una época de cambios y transformaciones. Haciendo lo mismo, no se llega a un país diferente; pero destruyendo lo que funciona, tampoco se construye un país mejor.



Por eso es bueno conversar, aunque a veces haya que entrar “a la cocina”; el verdadero líder no le teme al qué dirán de sus colegas y sus adversarios. Hay que ver la coyuntura como una oportunidad para construir nuevos consensos, pero entre todos, no solo electorales, de manera que puedan guiar el desarrollo de nuestro país por los próximos 30 años.

Necesitamos reconstruir las confianzas. La deslegitimación del sistema institucional es más amplia que el solo rechazo a los políticos. Se expresa en el rechazo a los proyectos energéticos y ambientales. Es una crisis general de la credibilidad y de la cohesión social, que debemos comenzar a revertir.

Hay que volver a creer en las regiones, en su potencialidad, a pesar del mal momento que vivimos para el liderazgo regional. Hay que colaborar, sin distinción de público o privado ni colores políticos. A los partidos políticos, a las empresas y a los ciudadanos, nos hace falta volver a ponernos la camiseta de la Región.

Debemos, sobre todo, ponernos de acuerdo en una mirada común de futuro; una visión ambiciosa, pero posible, detrás de la cual nos situemos todos. Así salió adelante el país vasco y varias provincias colombianas, antes azotadas por la violencia y la crisis económica. La clave de los logros del pasado fue la unidad de principios y de objetivos, así debe ser también en el futuro.

Más sobre el 18 de octubre. Disociación y revolución o concordia y unanimidad



Rodrigo Colarte Olivares
Doctor en Ciencias Políticas y
Sociología, Universidad
Pontificia de Salamanca,
España.

Mucho se ha escrito sobre el 18 de octubre de 2019 (18-0). Y si bien existe una extensa bibliografía, artículos académicos y de difusión general, a cinco años de ocurrido los hechos cabe preguntarse si acaso existe una visión general integradora, que pretenda, más allá del análisis político coyuntural, dar una visión desde la cual proveer coherencia y sentido a este episodio de la vida nacional. Es cierto que existen diversas hipótesis acerca del origen y naturaleza del 18-0 como, por ejemplo, que fue una revolución, como lo plantea Fernando Villegas, o un efecto de la modernización, como señala Carlos Peña, o simplemente una revuelta como lo sostiene el Partido Comunista. Sin embargo, todas ellas parecen insuficientes para comprender el mayor periodo de violencia que ha tenido Chile durante el siglo XXI.

Probablemente, desde la filosofía política, el autor español José Ortega y Gasset aporta una estructura conceptual desde la cual es posible comprender en un sentido amplio lo ocurrido en Chile. Ortega supone que la sociedad posee unos principios que fundamentan y dan consistencia a la vida social, al punto que, si ellos se debilitan, la estructura social se desintegra. El primero de ellos, que nos interesa destacar, es la concordia o unanimidad. Este principio garantiza la unidad social. La concordia es el consenso acerca de las creencias últimas sobre la realidad y permite a los miembros de un grupo social valorar los hechos de modo similar.

La concordia, entendida como el fundamento último de una sociedad estable, coexiste con las divergencias de opinión. Cuando la disensión afecta los estratos profundos, la concordia deviene en discordia y con ello la sociedad se disocia, se convierte en dos sociedades. La disensión radical acerca de las cuestiones últimas genera la destrucción de la sociedad estable. La relación entre discordia y concordia es un hecho que se fundamenta en que el ser humano no sólo tiene impulsos sociales, sino también impulsos antisociales. Mientras una parte de la sociedad se esfuerza por consolidar la sociedad, otra parte va en sentido contrario. En su texto sobre el imperio romano, Ortega profundiza esta idea: "La sociedad, conste, es tan constitutivamente el lugar de la sociabilidad como el lugar de la más atroz insociabilidad, y no es en ella menos normal que la beneficencia, la criminalidad".

De lo anterior se desprende que la sociedad es originariamente cooperación, pero también lucha entre sus miembros. De ahí que se requiera un poder moderador de los antagonismos que regule los impulsos antisociales. El estado y las leyes son los medios que emplea la colectividad humana para evitar la disociación y garantizar la convivencia social estable y fructífera. En suma, para Ortega, el Estado es un aparato ortopédico, puesto en la sociedad para evitar la disociación y enfrentar las situaciones de peligro.

Según Ortega, el estado se funda en la opinión pública, es decir, en el conjunto de usos intelectuales, ideas vigentes sobre el universo, el ser humano, lo justo y lo bello. En este contexto, y tal como el autor lo sostiene en *La Rebelión de las Masas*, el estado es entendido como el "estado de la opinión; una situación de equilibrio, de estática". Si en la sociedad no existe una opinión pública con verdadera vigencia y unanimidad, el estado desaparece y se generan opiniones particulares que intentan hacer valer sus propias convicciones. Por tanto, la ausencia de opinión pública tiene por consecuencia la división de la sociedad en grupos discrepantes que sustentan sus opiniones particulares, que se anulan y debilitan al Estado. En *El Hombre y la Gente*, Ortega sostiene: "Cuando esto acontece es que la sociedad se escinde, se parte o disocia y entonces el poder público deja de serlo, se fragmenta o parte en partidos. Es la hora de la revolución y la guerra civil".

Probablemente, el Chile del 18-0 no llegó a la guerra civil, pero sí evidenció graves divergencias acerca de aquellas creencias comunes en las que descansan la concordia y la unanimidad, básicas para mantener la unidad social. Y, presumiblemente, no se referían tan sólo a temas político-filosóficos, como la configuración acerca de la igualdad, la justicia, la riqueza o los abusos, sino de disensos tan básicos como la mantención del emblema nacional, el himno y la conservación de tradiciones patrias. De algún modo, se trató de un espíritu refundacional, que como su nombre lo indica, partió justamente rompiendo el consenso que asegura la estabilidad del país. Una vez configurado el disenso y la disociación, la violencia fue la consecuencia lógica.

Es posible detectar elementos ideológicos que favorecieron o bien le dieron sentido al proceso de disociación. Es también dable pensar en la acción de agrupaciones organizadas que actuaron por largo tiempo en el debate nacional para debilitar aquellas certezas comunes, la concordia, y al final se hizo visible también la actividad de otros grupos que se instalaron en la calle para ejercer diversas formas disruptivas de expresión social, ya no sólo para visibilizar el desacuerdo, sino además para señalar el camino de los cambios profundos que sustentaban.

No fue el acuerdo por la paz, firmado por casi todos los partidos políticos, lo que terminó con la violencia y el peligro cierto de una revolución o guerra civil, sino más bien la irrupción de la pandemia, que obligó a los grupos discordantes a entrar en cuarentena y abandonar las calles. Esto quiere decir, que la disociación no fue resuelta inmediatamente después de la ruptura, sino más bien se postergó, conforme lo expresado en el acuerdo, a la realización de un plebiscito y de ser aprobado, a la redacción de una nueva constitución. Pero, esta constitución tampoco consiguió restablecer la concordia. Muy por el contrario, el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 fue una guerra campal que terminó con la derrota de la disociación, restableció todo aquello que fue quemado y convirtió en una minoría a quienes sostuvieron la refundación. El segundo ensayo constitucional tampoco consiguió avanzar en el restablecimiento de la concordia. Y las elecciones municipales y de gobernadores de fines de octubre de 2024, como las presidenciales y parlamentarias del próximo año, prometen más disenso y polarización.

Tal vez el principal problema para recuperar la concordia o unanimidad de la que habla Ortega es el ímpetu refundacional que el gobierno del presidente Boric aún mantiene. Y esto básicamente porque Chile no es un país dividido en dos partes electoralmente similares, sino entre una minoría que gobierna y una oposición diversa, que se une en la crítica a la refundación y que hasta el día de hoy conforma una mayoría social. Y entonces las preguntas que cabe realizar son: ¿es legítimo y plausible que grupos minoritarios, pero influyentes, hoy en el gobierno, pueden imponer sus particulares puntos de vista a una mayoría que no los comparte? Y más aún, ¿por la vía de la imposición minoritaria, será posible restablecer los acuerdos que permiten organizar la sociedad, asegurar la concordia y finalmente compartir una forma de ver y entender el mundo común que asegure la paz y la estabilidad? Porque lo que tenemos hoy, como herencia del 18-0, es un país polarizado, en el que los acuerdos parecen no formar parte de las propuestas políticas y los consensos en los temas relevantes parecen pertenecer a un pasado que para algunos merecía ser quemado y olvidado. Y mientras no se reestablezca la concordia será muy difícil lograr una sociedad que progrese y alcance mayores niveles de desarrollo. El disenso crónico y el maximalismo político son los condimentos de una receta infalible para generar pobreza y subdesarrollo.

El Biobío profundo y el octubre chileno



Miguel Ángel Fernández
Subdirector Académico Faro,
Universidad del Desarrollo.
Ph.D. en Ciencia Política,
Boston University.

Algo cambió en el Biobío. No fue solamente la caída de la estatua de Pedro de Valdivia, la destrucción del edificio de Caja Los Andes o las veredas del centro de la ciudad; fue algo más profundo que ha marcado los últimos 5 años en nuestra región. El tono de los actores públicos, el comportamiento de los votantes en cada una de las 33 comunas que la componen y la discusión sobre el futuro de la zona son parte de los vestigios de uno de los procesos políticos más relevantes de la historia nacional en las últimas décadas.

La atención mediática del país suele tener sede en Santiago, lo que deja de lado muchas veces eventos relevantes en la convivencia cívica y los patrones políticos del resto del país. Octubre de 2019 inició en Santiago con la destrucción del transporte público de la capital, pero terminó congregando entre 30 mil y 50 mil personas en la capital del Biobío una semana más tarde. Desde entonces, la narrativa pública dominante —replicada por comentaristas, líderes de opinión y dirigentes políticos— instaló lo que denominó la hipótesis del "malestar universal", una suerte de furor que recorrió las venas de Chile y que argumentaba un estado casi absoluto de rechazo al rumbo sobre el que caminó el país durante más de tres décadas.

Las más de 460 mil personas que votaron a favor de una nueva carta constitucional casi un año después de los eventos parecían prueba irrefutable de dicha narrativa dominante. Casi tres de cada cuatro habitantes del Biobío que fueron a las urnas optaron por el camino del cambio constitucional, y en esa misma línea mantuvieron su decisión de voto cuando en abril de 2021 una cifra similar decidió apoyar a candidatos que apostaban por un cambio drástico en nuestras instituciones políticas, sociales y económicas.

A cinco años de los eventos de octubre de 2019, resulta aún más relevante mirar estas cifras y leerlas en su debido contexto. Los procesos electorales que vivimos en el Biobío muestran un cambio abrupto entre los procesos de 2020-2021 (plebiscito de entrada y elección de convencionales constituyentes) versus los que tuvieron lugar en el período 2022-2023 (plebiscito de salida inicial, elección de consejeros constitucionales y segundo plebiscito de salida).

Para analizar qué ha ocurrido electoralmente en nuestra región, resulta útil examinar el escenario de los últimos cinco años a partir de lo que denominaré las fuerzas del "octubrismo" en comparación con la movilización "no octubrista". Durante el primer período de batería electoral, más de un 70% de los votos válidamente emitidos apoyaron la opción que la fuerza octubrista presentó en las papeletas; con más de 460.000 votos se aprobó el proceso para redactar una nueva constitución y con más de 340 mil sufragios las fuerzas del octubrismo triunfaron en el proceso de selección de convencionales constituyentes.

Ese alto porcentaje se invirtió para los procesos de 2022 y 2023, donde con prácticamente un 70% de los votos válidos, la ciudadanía se inclinó por opciones no octubristas tanto en el plebiscito de salida como en la siguiente competencia por miembros del Consejo Constitucional. Así, más de 800 mil ciudadanos del Biobío rechazaron la propuesta constitucional de la Convención y un número superior a 610 mil electores apoyaron las opciones presentadas por fuerzas que estuvieron en contra del primer texto para la carta magna. La fuerza del octubrismo electoral se mantuvo en ese 2022 y primer semestre de 2023 relativamente similar a los niveles del primer proceso, pero el ingreso de nuevos votantes —producto del sistema de inscripción automática y voto obligatorio— cambió el escenario.

Por ello, se instaló la tesis del "péndulo", con patrones electorales que cambiaron rápidamente y que habrían mostrado una suerte de "arrepentimiento" con las decisiones electorales antes mencionadas y el triunfo del presidente Boric en las urnas.

Sin embargo, una mirada más detallada a los territorios de la región me inclina por una posición distinta: el Biobío profundo fue a votar por primera vez, mostrando cómo las zonas urbanas y rurales presentan tendencias distintas, cómo al sur del río Biobío y al norte las posiciones presentan diferencias, y cómo grupos específicos terminaron por decidir rechazar aquello que el octubrismo intentó instalar.

Esta tesis de la movilización del Biobío oculto tiene tres efectos relevantes:

1. Activó a grupos que antes del furor octubrista poco se involucraban en los asuntos públicos —un ejemplo de ello es la fuerza de grupos cristianos y la conformación de un partido de denominación religiosa en el panorama regional.
2. Reveló la mayoritaria moderación del votante que habita en muchas de las 33 comunas de la región —rechazaron el proceso de la Convención, pero también el del Consejo.
3. Mostró con fuerza cómo la contingencia determina elecciones, cuestión que se ve exacerbada por la falta de heurísticas partidistas claras y la proliferación de pactos instrumentales sin futuro programático.

Por supuesto, el rechazo del segundo proceso constituyente podría poner en jaque esta hipótesis del nuevo votante del Biobío; a quienes así lo crean se debe responder con prudencia, pues el rechazo del texto constitucional propuesto por el Consejo que funcionó durante 2023 no necesariamente simboliza abrazar las ideas refundacionales del período 2019-2021. Es más, el proceso final de 2023 fue la elección más reñida en los últimos 5 años, siendo definida por menos de 40 mil votos en nuestro territorio.

Las preguntas sobre ese nuevo perfil del votante de nuestra región no están resueltas, y más bien serán puestas a prueba en los próximos comicios regionales y municipales. El hito político de octubre de 2019 tiene el potencial de transformarse en una clave divisora para la política regional, pues cuando los partidos están debilitados y la ciudadanía tiene pocos elementos de los cuales aferrarse para interpretar qué ocurre en la región y el país, eventos de la naturaleza histórica de lo que ocurrió hace 5 años tienen todas las características necesarias para convertirse en lentes que nos ayuden a entender dónde se posicionan nuestros dirigentes.

A los pocos días, a cinco años, a veinte años



Miguel Nazar Daccarett
Director de Carrera
Arquitectura (Concepción),
Universidad del Desarrollo.
Magíster en Proyectos
Complejos, Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Una de las primeras cosas interesantes de comprender es que la ciudad es un organismo vivo, que, si bien se compone de elementos estáticos, según su diseño, entre otras variables, provoca dinamismo, interacción y movimiento, y con ello, diversos fenómenos sociales y maneras de habitarla. Un ejemplo cotidiano de esto es el edificio de la Facultad de Química de la Universidad de Concepción, que por su diseño en el corredor con la fachada continua vidriada genera un espacio para bailes urbanos. Otro ejemplo interesante es el de la Explanada del Parque Bicentenario, que, por su condición de vacío urbano, es capaz de albergar 250.000 personas en el Festival Rock En Conce (REC). Ambos fenómenos producen que los habitantes cambien momentáneamente el uso y carácter de esos espacios.

Otro punto relevante de entender es que el desarrollo de las ciudades son procesos lentos y de largo plazo, y que muchas veces responden al reflejo cultural y económico de una época determinada. A su vez, toda crisis económica, social, natural, cultural, e incluso de salubridad, trae consigo oportunidades de reflexión y reestructuración que se reflejan en los modos de habitar y en la misma ciudad. Por ejemplo, el tsunami del "27F", que fue una catástrofe, trajo consigo nuevas normativas de construcción entorno a los bordes costeros y nuevos proyectos que mejoran la calidad urbana como sucedió en Talcahuano, Dichato o Constitución.

Desde un punto de vista urbano, el "Estallido Social" del 18 de octubre de 2019, modificó la manera de habitar espacios emblemáticos de la ciudad durante esos días, para bien y para mal. Este fenómeno se puede dividir entre el legítimo derecho de manifestarse reconociendo el eje O'Higgins, entre la explanada de Tribunales y la Plaza de la Independencia, como un punto que propició la expresión social, pero, por otro lado, se desarrollaron actos delictuales que se tomaron distintos puntos de la llamada "Zona Cero", generando un daño evidente a Concepción. Si bien estos hechos de violencia empañaron de manera contundente lo que la ciudadanía quería expresar, hay que entender que se reveló una falta de equidad social, y que, desde el desarrollo de la ciudad, debe hacernos reflexionar y avanzar hacia una equidad social-urbana.

En este contexto, para poder entender desde una mirada de ciudad el estallido social, pareciera ser pertinente comprender el fenómeno en 3 tiempos: a los pocos días, a cinco años y a "veinte años"; desde el dinamismo y una ciudad como organismo vivo, que sufrió, hasta la proyección de una ciudad más equitativa entendiendo el estallido como una oportunidad para realmente avanzar.

A los pocos días

Sin duda, la plaza René Schneider junto al edificio Tribunales son un punto de encuentro masivo para los ciudadanos de Concepción, dado su diseño, desde la centralidad que presenta en su emplazamiento, siendo una articulación entre la Diagonal Pedro Aguirre Cerda y los ejes O'Higgins y Barros Arana, hasta el vacío urbano que permite que ocurran diversas situaciones de la ciudad. Esta zona fue, posiblemente, el lugar más significativo durante el "Estallido Social", tanto por la masividad que convocó albergando marchas de hasta 100.000 personas, como por los daños provocados de manera delictual, fundamentalmente con el incendio del edificio Caja Los Andes, convirtiéndola en el corazón de la "Zona Cero".

Naturalmente, al estar en el eje de Avenida O'Higgins, por su condición de explanada y por su importancia, la Plaza de la Independencia también se convirtió en un punto de reunión y protesta masiva. Tribunales, O'Higgins y la Plaza de la Independencia constituyeron un sistema de configuración urbana que propició la manifestación de los ciudadanos. Lamentablemente, la plaza también fue vandalizada principalmente en sus pavimentos y mobiliarios, junto al robo de la estatua de Pedro de Valdivia. A su vez, en el eje de Barros Arana, también se generaron daños significativos principalmente por los saqueos de locales, y el retiro de pavimentos y mobiliarios para hacer las barricadas.

Una tercera zona afectada, de manera considerable, fue la rotonda de avenida Paicaví con el eje Carrera. Esta zona sufrió los incendios de los locales de la "Telepizza" y el "Sodimac", ambos equipamientos emblemáticos del eje Carrera. Además, al igual que las otras zonas, presentó daños importantes en el pavimento y el mobiliario, especialmente en la rotonda.

La ciudad como un organismo vivo sufrió, tanto en sus componentes físicos como en la percepción de inseguridad de la ciudadanía, que se reforzó, entre otras cosas, por el daño de las luminarias en varios lugares. En pocos días, el centro de Concepción había cambiado. Aparecieron nuevos vacíos urbanos, por ejemplo, en el eje Carrera. Y si bien, los habitantes de Concepción se manifestaron y la ciudad pudo albergar marchas de hasta 100.000 personas que se expresaron, los actos delictuales de grupos focalizados dañaron la ciudad y debilitaron el mensaje. Las fachadas de los locales pasaron de vitrinas que exponían los servicios y productos a fachadas con cortinas metálicas, que, si bien protegían, impactaron negativamente en la espacialidad de las calles por un largo tiempo.

A cinco años

A cinco años, lamentablemente, no estamos mejor.

Es difícil tener una lectura del impacto del estallido social sin considerar la pandemia del Covid 19 que inició a los pocos meses. Por una parte, el estallido instaló un mensaje de falta de equidad, sin embargo, fue la pandemia la que de manera muy cruda y directa lo evidenció.

Desde una mirada más integral, tomando distancia de los daños específicos de la "Zona Cero", hoy el país se encuentra en peores condiciones, por ejemplo, habitacionales, que en el año 2019. Durante el año del estallido Chile contaba con 802 campamentos, habitados por 47.000 familias. Al año 2023 se llegó a 1.290 campamentos y 113.000 familias, y particularmente la Región del Biobío este año llegó a 225 campamentos posicionándose como la segunda región con más campamentos después de Valparaíso, aumentando en 69 en los últimos 2 años. Este hecho, que no es atribuible al estallido, grafica lo lejos que estamos de las demandas de equidad social discutidas durante el "18-O".

Ya de manera específica, al analizar el estado de la "Zona Cero", identificamos variadas condiciones. Por una parte, la Plaza de la Independencia fue remodelada con una inversión de más de 800 millones de pesos, revitalizando la zona más céntrica de la ciudad. También, la plaza René Schneider, con una inversión de 1.000 millones, fue remodelada durante este año. La rotonda de Paicaví con Carrera fue reparada retornando a su estado original.

Si bien los 3 espacios públicos más significativos durante el estallido han sido recuperados, el centro de la ciudad continúa presentando deterioro a partir de los incendios provocados. Por una parte, el terreno del Sodimac de Carrera quedó como un terreno erizado a la espera de algún proyecto. Lo propio con el terreno de la Telepizza. El caso del edificio de la Caja Los Andes continúa en un estado de abandono en condiciones muy similares a cómo quedó durante el estallido. Coincidentemente estos 3 puntos pertenecen a privados, en donde el Municipio no puede intervenir, y aun cuando son terrenos privados, impactan urbanamente a la ciudad más allá de sus propios perímetros, desde la seguridad, el perfil armónico del entorno, hasta las posibles oportunidades que se pueden generar con la activación de estos lugares.

Si bien a cinco años se han recuperado los espacios públicos más identitarios del centro de la ciudad, el impacto de la vandalización de estos lugares es doble, ya que los recursos invertidos para su recuperación pudieron haber sido destinados para nuevos equipamientos, parques o plazas, en otras zonas de la ciudad que urgentemente lo requieren, abordando el fondo del mensaje con el foco en avanzar a una ciudad más equitativa.

A “veinte años”

Con una perspectiva que trasciende los hechos delictuales y el estado de la ciudad post estallido, y que ponga en el centro el mensaje de la falta de equidad social, es interesante definir algunos puntos relevantes para convertir la crisis que vivimos en una oportunidad de trazar una hoja de ruta hacia una ciudad más equitativa. Para ello, hipotéticamente se plantea una ciudad a 20 años del estallido, comprendiendo los tiempos de evolución urbana que se requieren.

Desde la disciplina de la Arquitectura y el Urbanismo, cuando uno busca comprender a qué se refiere la equidad urbana, se hace fundamental entender las distintas escalas que impactan en el habitar cotidiano de los ciudadanos de Concepción, como un sistema integral entre vivienda, barrio, espacio público, equipamiento y movilidad, entre otras cosas.

Posiblemente, el tema más urgente, es revertir la curva de crecimiento de los campamentos en la Región, formalizando las viviendas generando, no solo condiciones mínimas de habitabilidad desde lo cuantitativo y cualitativo, sino, también, pensando en la integración urbana, edificando zonas que promuevan la interacción y oportunidades. Esta es una primera escala, la de la vivienda, que, al establecer estrategias claras y suficientes recursos, puede abordar de buena manera una segunda escala, la del barrio.

Al generar conjuntos de vivienda en lugares integrados a la ciudad y planificándolos de una determinada manera, invirtiendo recursos también en los equipamientos de primera necesidad, se mejora sustancialmente la vida de los ciudadanos. Esto se puede graficar en dos ejemplos, uno de necesidad prioritaria y otro de oportunidad. Por una parte, en nuestra Región, hay 18 comunas que no cuentan con una farmacia, un equipamiento tan básico como importante. Este hecho debiese ser considerado, planificando barrios que tengan acceso a pocos minutos de este tipo de equipamientos, como se ha discutido a partir del concepto de “La ciudad de los 15 minutos”. A su vez, el diseñar barrios con una plaza, no sólo genera el contar con áreas verdes o espacios de recreación que complementen las viviendas, que, en su mayoría, no cuentan con patio, sino, también propician la interacción entre vecinos y la cohesión social, estableciendo redes de organización que, por ejemplo, mejoran la seguridad.

En una tercera escala, la de las comunas, y una cuarta escala, la de la ciudad, es fundamental reforzar la movilidad y conexión. Concepción se ha desarrollado en expansión, entre otras variables, por su condición geográfica. Y si bien, muchas comunas cuentan con una autonomía en equipamientos intermedios, como colegios, supermercados, centro de salud comunal, no es una ciudad policéntrica y la mayoría de las comunas siguen dependiendo del centro de la ciudad, desde lo laboral, la educación superior, los hospitales, entre otros servicios. En este contexto, avanzar en la movilidad como un sistema integrando los distintos modos de transporte público, reforzando el Biotren como un medio estructural para la Región, ampliando su cobertura y frecuencia, y articulándolo con transporte comunal, mejoraría sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos, minimizando los tiempos de traslado, aumentando la seguridad y aportando a la economía de las familias.

Es muy posible que avanzar en viviendas de buenas condiciones y bien localizadas, equipamientos barriales y comunales, plazas y parques, y un sistema de transporte público rápido y seguro, puedan hacer que Concepción se convierta en una ciudad más equitativa.

Entonces, a cinco años: ¿Estamos mejor? No. ¿Podemos estar mejor? Sin duda. A partir de la violencia, el estallido social generó un impacto negativo en la ciudad. Sin embargo, no hay que deslegitimar los temas que se establecieron como importantes, y desde el mensaje, entender lo que sucedió como una oportunidad para evolucionar hacia una mejor ciudad.

Análisis de la economía regional en el período



Vivana Véjar Himsalam
Profesora Investigadora Faro,
Universidad del Desarrollo.
Máster en Economía, OMMA
Business School Madrid-
Universidad Francisco
Marroquín.

Los hechos de violencia ocurridos en octubre del 2019 afectaron en mayor medida al comercio local, cuyos propietarios debieron tapizar con material resistente sus vitrinas para no continuar sufriendo los embates de las acciones delictuales y del vandalismo. La sensación de inseguridad y la violencia, constituyeron de cierta manera un riesgo de confiscación de la riqueza al impedir desarrollar actividades comerciales de manera que la provisión fuese continua durante el día y durante todos los días.

Las autoridades debieron redoblar sus esfuerzos para asegurar que las personas pudiesen seguir percibiendo rentas; si estas no podían venir de sus actividades formales, debían venir de parte del Estado. Así, los legisladores aprobaron con premura 3 proyectos de ley que permitieron retirar fondos privados cuyo fin era la capitalización para las pensiones futuras. Además, el presidente de aquella época, Sebastián Piñera, anunció la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE) que benefició al 90% de la población chilena. El monto total de esa política fiscal ascendió a 8.670 millones de dólares, junto a otras medidas que aliviaron de manera breve a la pequeña y mediana empresa.

En la región del Biobío, los IFE beneficiaron a cerca de 620 mil familias, quienes recibieron, al igual que todas las familias del país, un bono de cien mil pesos por cada integrante del grupo familiar. En total, se entregaron seis partidas de esta ayuda en el año 2020, más el bono Covid, más siete IFE's en el año 2021. Todas estas ayudas se vieron reflejadas en la impactante recuperación que experimentaron los indicadores macroeconómicos en Chile, y particularmente en la región del Biobío, como se verá a continuación.

Entre 2013 y 2023 se puede apreciar una tendencia en que el aporte al PIB más importante en la región lo realiza el sector servicios, seguido de la industria manufacturera y en último lugar, el comercio. Durante el año 2020, se puede apreciar una clara disminución de la actividad económica de todos los sectores. Entre el año 2019 y 2020 se vio una disminución de la actividad del sector servicios de un 8% seguido de un repunte de 15% en el siguiente año producto de las ayudas estatales. Entre el año 2022 y 2023, la actividad de este sector creció un 7% y un 3% respectivamente, volviendo a la tasa promedio de crecimiento pre-pandemia que fue de un 3,1% entre los años 2014 y 2019.

El crecimiento promedio de la industria en la región del Biobío entre los años previos a la pandemia y estallido social fue de 2,3%. Para el año 2020, esta se contrajo un 4%, seguido de una contracción de 1% en el 2021 y de 4% en 2022. Recién para 2023, la industria experimentó un incremento de 13%. El comercio, por su parte, ha tenido un crecimiento promedio de 2,8% en 10 años. En 2019, el comercio experimentó una disminución de 2%, seguido de un tímido crecimiento de 3% en 2020 y un fuerte repunte de 23% en 2021. Sin embargo, y a pesar de las transferencias estatales, el crecimiento del comercio en la región del Biobío no pudo sostenerse, ya que en los años 2022 y 2023 este sector ha experimentado una contracción de 3% y 5% respectivamente.

Estos datos arrojan luces y ayudan a comprender que las ayudas del estado no impactaron sustancialmente a la industria, como sí ocurrió con el sector comercio y servicios. Sin embargo, todas las ayudas estatales fueron transitorias y no siempre logran corregir todas las distorsiones que fueron provocadas tanto por los eventos de octubre 2019 como los de la pandemia. En total, el PIB regional experimentó una caída de 5% durante los años 2019-2020 y se recuperó en un 9% hacia el año 2021, volviendo a caer un 2% en 2022 y creciendo un 6% en el año 2023.

En tanto, el PIB per cápita, en el mismo período, tuvo el mismo comportamiento; entre los años 2013 y 2019 la variación porcentual promedio del crecimiento del PIB per cápita fue de 1,8% anual. Para el año 2020, este cayó un 6% para recuperarse en 8,7% en el año siguiente.

Durante los años 2022 y 2023 el crecimiento del PIB per cápita fue de 2,1% y 5,6% respectivamente. El ingreso promedio de los habitantes de la región del Biobío experimentó el mismo fenómeno anterior; entre 2019 y 2020 aumentó un 14,1%, pero en 2021 creció solo un 4,6%, para volver a aumentar un 15,4% al año siguiente y un 12,7% en el año 2023. Sin embargo, la brecha de género se profundizó entre los años 2020 y 2022, llegando a ser la diferencia entre el ingreso promedio de hombres y el de mujeres de un 25%.

En la región del Biobío, como en el resto del país, los altos ingresos están dados por el nivel educacional. En 2019, la diferencia entre los ingresos de una persona con estudios de posgrado y una que solo terminó la enseñanza básica es de un 342%. En 2020 esta diferencia disminuyó a 297%, y volvió a aumentar al año siguiente en 306%. En 2022 y 2023 la diferencia fue de 379% y 357% respectivamente.

No hay duda que las medidas económicas que fueron implementadas para paliar los efectos dañinos que se produjeron en el comercio, a raíz de los eventos ocurridos a partir de octubre de 2019, lograron su cometido. Sin embargo, no toda la disminución de la actividad económica fue producto de ese suceso. Una inusual coincidencia ubicó a la pandemia global del Covid-19 justo al lado de los desórdenes ocurridos en todo el país, sobre todo en los centros urbanos más importantes, y particularmente en el radio urbano de la capital de la región del Biobío, Concepción.

Sin embargo, la industria y algunos servicios, junto con el comercio, vieron doblemente afectadas sus cadenas de suministro habituales producto de la pandemia global que se venía desarrollando. Si bien, los hechos de octubre fueron dañinos para la economía local, estos se profundizaron dada la cercanía con el fenómeno mundial que se expandía rápidamente en todo lugar.